



Consejo de Seguridad

Distr. general
25 de abril de 2008
Español
Original: inglés

Carta de fecha 17 de marzo de 2008 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe adjunto, presentado por el Níger de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Agradecería que tuviera a bien disponer lo necesario para que la presente carta y su anexo se distribuyan como documento del Consejo de Seguridad

(Firmado) Neven **Jurica**
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)
relativa a la lucha contra el terrorismo



Anexo

[Original: francés]

Nota verbal de fecha 10 de marzo de 2008 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por la Misión Permanente del Níger ante las Naciones Unidas

La Misión Permanente de la República del Níger ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Presidente del Comité contra el Terrorismo y tiene el honor de enviarle adjunto el informe relativo a las medidas adoptadas por el Níger para la lucha contra el terrorismo correspondiente a 2007 (véase el texto adjunto).

Texto adjunto

Informe nacional del Níger correspondiente a 2007 presentado al Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Consciente de que los actos de terrorismo constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, la comunidad internacional, en la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 28 de septiembre de 2001, y en otros instrumentos universales contra el terrorismo, pidió a los Estados que pasaran a ser partes en esos instrumentos, los ratificaran y adoptaran todas las medidas complementarias necesarias para prevenir y reprimir en su territorio, por todos los medios legales, la financiación del terrorismo y la preparación de todo acto de terrorismo, impidieran la circulación de terroristas imponiendo controles eficaces de fronteras y controles en la expedición de documentos de identidad y de viaje. En esos mismos instrumentos se pide a los Estados que encuentren medios para intensificar y agilizar el intercambio de información operacional, intercambien información de conformidad con el derecho internacional y la legislación interna, cooperen, en particular mediante acuerdos y convenciones bilaterales y multilaterales, para prevenir y reprimir los ataques terroristas, y adopten medidas contra quienes cometan actos de esa índole. También se los invita a fomentar la cooperación y aplicar plenamente las convenciones y los protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad 1269 (1999) y 1368 (2001), etc.

A fin de satisfacer esas exigencias en su calidad de Estado Miembro de las Naciones Unidas y empeñado en el respeto al derecho internacional, el Gobierno del Níger ha adoptado muchas medidas que se manifiestan en los actos siguientes:

- Adhesión y ratificación de los instrumentos universales contra el terrorismo;
- Incorporación de esos instrumentos en el ordenamiento jurídico interno;
- Incorporación de las disposiciones de la resolución 1373 (2001);
- Establecimiento de estructuras encargadas de vigilar la aplicación de las decisiones adoptadas;
- Finalmente, concertación de acuerdos bilaterales y multilaterales.

I. Medidas de adhesión y ratificación

En la última actualización del estatuto de ratificación se indica que el Níger ha ratificado diez (10) de los dieciséis (16) instrumentos universales contra el terrorismo en vigor.

El siguiente cuadro contiene la lista de los instrumentos universales ratificados por el Níger:

<i>No.</i>	<i>Objeto</i>	<i>Ley</i>	<i>Decreto de publicación</i>	<i>Carta de ratificación</i>	<i>Observación</i>
1	Convenio relativo a las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, aprobado en Tokyo el 19 de febrero de 1971	No.71-03 de 29 de noviembre de 1971			
2	Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, aprobado en La Haya el 16 de febrero de 1970 y firmado el 19 de febrero de 1971	No.71-30 de 6 de septiembre de 1971	No.76-195/PCMS/MAE/C de 20 de noviembre de 1976		
3	Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, aprobado en Montreal el 23 de septiembre de 1971	No. 72-9 de 5 de abril de 1972		Firmado el 6 de marzo de 1972 Ratificado el 1° de septiembre de 1972	
4	Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada el 14 de diciembre de 1973	Ordenanza No. 85-10 de 13 de mayo de 1985	No. 85-61/PCMS/MAE/C de 5 de junio de 1985	Firmada el 14 de diciembre de 1973 Ratificada el 17 de junio de 1985	
5	Convención internacional contra la toma de rehenes, aprobada el 18 de diciembre de 1979 (Naciones Unidas)	Ley No. 2003-044 de 17 de noviembre de 2003		Carta R 0036/PRM de 14 de septiembre de 2004	BE No.105/MAE/C/DAJC Mult 1 de 28 de septiembre de 2004 a la MPN
6	Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988	Ley No. 2004-09 de 2 de enero de 2004	Decreto No. 2004-243/PRM/MAE/C de 13 de septiembre de 2004	Carta R 0029/PRM de 29 de julio de 2004	BE No. 91/MAE/C/DAJC Mult 1 de 27 de agosto de 2004 a la MPN
7	Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, aprobado en Roma (Italia) el 10 de marzo de 1988	Ley No. 2004-43 de 17 de noviembre de 2003		Carta R 0045/PRN de 14 de septiembre de 2004	BE No. 102/MAE/C/DAJC Mult 1 de 28 de septiembre de 2004 a la MPN
8	Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección, aprobado en Montreal (Canadá) el 1° de marzo de 1991	Ley No. 2003-042 de 17 de noviembre de 2003		Carta R 0038/PRN de 14 de septiembre de 2004	BE No.103/MAE/C/DAJC Mult 1 de 28 de septiembre de 2004 a la MPN
9	Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, aprobado en Roma (Italia) el 10 de marzo 1988	Ley No. 2004-35 de 2 de junio de 2004	Decreto No. 2004-28/PRN/MAE/C de 13 de septiembre de 2004	Carta R 0030/PRN de 29 de julio de 2004	BE No. 00092/MAE/C/DAJC Mult 1 de 27 de agosto de 2004 a la MPN
10	Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997	Ley No. 2003-040 de 7 de noviembre de 2003		Carta R 0040/PRN de 14 de septiembre de 2004	BE No. 104/MAE/C/DAJC Mult 1 de 28 de septiembre de 2004 a la MPN

<i>No.</i>	<i>Objeto</i>	<i>Ley</i>	<i>Decreto de publicación</i>	<i>Carta de ratificación</i>	<i>Observación</i>
11	Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999	Ley No. 2003-041 de 17 de noviembre de 2003	Decreto No. 2004-250/PRN/MAE/C de 13 de septiembre de 2004	Carta R 0035/PRN de 27 de agosto de 2004	BE No. 006316/MAE/C/DAJC Mult 1 de 10 de septiembre de 2004 al Secretario General de las Naciones Unidas
12	Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, aprobado en Viena el 13 de marzo de 1980	Ley No. 2004-023 de 2 de junio de 2001		Carta R 0028/PRN de 28 de julio de 2004	BE No. 0561/MAE/C/DAJC Mult 1 de 18 de agosto de 2004 transmitida al Director General del OIEA

Cabe señalar que dos de los instrumentos de ratificación, 8 y 9, se depositaron ante el Secretario General de las Naciones Unidas y no en la secretaría de la OACI o la Federación de Rusia o el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Gobierno de la República del Níger dispone de todo lo necesario para depositar según el procedimiento adecuado los instrumentos de ratificación a fin de registrarlos debidamente.

Por otra parte, el Gobierno acaba de aprobar el jueves 31 de enero de 2008 el proyecto de ley relativo a la ratificación del Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear, aprobado en Nueva York el 13 de abril de 2005.

Dicho proyecto de ley se enviará a la Asamblea Nacional para que lo apruebe.

En este momento, de los 16 instrumentos universales, sólo tres no han sido ratificados ni adoptados por el Níger. Se trata de:

- La enmienda a la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, aprobada en Viena el 8 de julio de 2006;
- El Protocolo relativo al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, aprobado en Viena el 14 de octubre de 2005;
- El Protocolo relativo al Protocolo sobre la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, firmado en Londres el 14 de octubre de 2005.

II. Medidas legislativas adoptadas por el Níger

La Ley No. 61-27 de 16 de julio de 1961 relativa al establecimiento del Código Penal del Níger, enmendada y complementada por la Ley 2003-25 de 13 de junio de 2003, consagra numerosas disposiciones para la represión de los atentados contra la persona, los delitos graves y los delitos contra la propiedad. Cabe mencionar principalmente con carácter ilustrativo las siguientes disposiciones:

Los artículos 222 y siguientes del Código Penal tipifican de manera general todos los actos de violencia. Esas disposiciones están en consonancia con los artículos 1-a y 1 bis a del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la

seguridad de la aviación civil (Montreal, 1971) y el Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, complementario de dicho Convenio.

En cuanto a las infracciones previstas en los artículos 1-b, 1-c, 1-d y 1 bis b de ese Convenio, están tipificadas parcialmente en los artículos 378, 379, 380, 384 y 385 del Código Penal.

Respecto del Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya, 1970), la legislación del Níger está en consonancia con dicho Convenio.

En efecto, el artículo 1 del Convenio está incorporado en el Código Penal en su artículo 399-1, resultante de la reforma de 2003 (ley 2003-26 de 13 de junio de 2003).

En virtud de esa disposición: “toda persona que mediante violencia o amenaza de violencia se apodere de una aeronave o asuma el control de ella será castigada con prisión de 10 a 20 años.

Si esos actos tienen como resultado heridas o enfermedades, la pena será de 20 a 30 años.

Si como resultado mueren una o más personas, se dictará la pena de muerte.

En el caso previsto en el párrafo 1, la pena se reducirá a prisión por un período de entre 5 y menos de 10 años si el culpable devuelve espontáneamente el control de la aeronave a su comandante o a las autoridades legítimas”.

Los artículos 265, 266 y siguientes, que reprimen los atentados contra la libertad individual (detenciones y secuestros arbitrarios) son igualmente conformes con la Convención internacional contra la toma de rehenes (Nueva York, 1979) (e igualmente con los artículos 2, 48, 49 y 208 del Código Penal).

Con la ratificación de los 12 instrumentos universales contra el terrorismo, el Níger ha emprendido una vasta reforma encaminada a incorporar esos instrumentos en su ordenamiento jurídico interno.

Las reformas tienen que ver con los siguientes aspectos:

A. Código Penal

Además de las reformas hechas en 2003 (Ley 2003-25 de 13 de junio de 2003 que enmienda la Ley No. 61-27 de 16 de julio de 1961 relativa al establecimiento del Código Penal), el consejo de Ministros acaba de aprobar el 17 de enero de 2008 el proyecto de ley de enmienda del Código Penal. Dicho proyecto de ley integra además los instrumentos universales aprobado en 2005 que el Níger no ratifica todavía.

Dicho proyecto deberá permitir la aplicación en el Níger del marco jurídico mundial contra el terrorismo.

En consecuencia, en adelante estarán tipificadas:

- Todas las infracciones contra la seguridad de la aviación civil, los transportes terrestres y los fluviales;

- Las infracciones contra la seguridad de los buques y las plataformas fijas. En adelante, la realización de actos de violencia contra las personas que se encuentren a bordo de un buque o una plataforma fija, si dichos actos ponen en peligro la seguridad de la navegación del buque o la de la plataforma fija, causan la destrucción de un buque o una plataforma fija o daños a dichas instalaciones, corresponde al ámbito de la ley penal. Lo mismo ocurrirá con:
 - La toma de rehenes;
 - Las infracciones cometidas contra las personas internacionalmente protegidas;
 - Los atentados terroristas con explosivos;
 - La posesión de materiales radiactivos, la fabricación o la posesión de dispositivos con el propósito de causar la muerte o daños corporales graves a las personas o con el propósito de causar daños considerables a la propiedad o al medio ambiente.

Cualquier forma de empleo de materiales o dispositivos radiactivos constituirá un acto de terrorismo nuclear castigado por la ley penal.

De conformidad con el proyecto de ley se castigará igualmente la financiación del terrorismo. En consecuencia, el hecho de suministrar o recaudar directa o indirectamente, ilícita e intencionalmente fondos con el propósito de que dichos fondos se utilicen, o sabiendo con conocimiento de que dichos fondos se utilizarán, en su totalidad o en parte, para perpetrar actos de terrorismo, será castigado por dicha ley. Habrá infracción aun si los fondos recaudados no se utilizan efectivamente para cometer actos de terrorismo.

También se castigará el reclutamiento de personas para cometer uno o varios de los delitos previstos en el proyecto de ley o para participar en la comisión de dichos delitos.

En cuanto a la prescripción, el proyecto propone un régimen que se aparta del derecho común. En efecto, de conformidad con el artículo 399-22 los delitos prescriben a los 10 años y los delitos graves a los 20.

Respecto de la competencia, todas las infracciones siguen estando bajo la jurisdicción del Tribunal de primera instancia de Niamey en lo que concierne a los delitos y del Tribunal de lo criminal de Niamey en lo relativo a los delitos graves.

El plazo para la detención preventiva se aparta igualmente de la norma de derecho común y será de 72 horas, renovable una sola vez.

B. Código de Procedimiento Penal

Las modificaciones hechas en 2003 y 2004 (leyes 2003-026 de 13 de junio de 2003 y 2004-21 de 16 de mayo de 2004 para enmendar la Ley No. 61-33 de 14 de agosto de 1961 relativa al establecimiento del Código de Procedimiento Penal) y las disposiciones ya existentes obedecen al empeño de los legisladores nigerianos en ampliar la competencia de los tribunales nigerianos a los delitos, graves o no, cometidos en el extranjero, orientándose en todo lo posible hacia el principio de “juzgar o extraditar” (artículos 642, 642-1, 643, 647, 648). En consecuencia, mediante la aplicación de ese principio ninguna infracción podrá eludir la competencia de los tribunales nigerianos.

Competencia de los tribunales nigerianos**Actos cometidos en el Níger**

Los artículos 42, 47, 363 y 646 del Código de Procedimiento Penal conceden a los tribunales del Níger competencia para juzgar todas las infracciones cometidas en el Níger o cuando uno de sus elementos constitutivos se haya cometido en el Níger.

Actos cometidos en el extranjero

- *Por un nigeriano*

El artículo 642 del Código de Procedimiento Penal concede a los tribunales nigerianos competencia para juzgar los delitos, graves o no, cometidos en el extranjero por un nigeriano, con reserva para los delitos castigados por la legislación del país donde se hayan cometido.

- *Por un extranjero*

El artículo 642-1 del Código de Procedimiento Penal concede a los tribunales nigerianos competencia para juzgar los delitos graves cometidos por extranjeros fuera del territorio del Níger cuando la víctima sea de nacionalidad nigeriana.

Respecto de la resolución 1373 (2001) se han adoptado las siguientes medidas.

Véase igualmente la Ley No. 2006-17 de 21 de junio de 2006 relativa a la protección y la seguridad nucleares y la protección contra los peligros de las emisiones radiactivas.

C. Respecto de la resolución 1373 (2001)**Párrafo 1**

a) Además de la ratificación por el Níger del Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, el Consejo de Ministros aprobó el 17 de enero de 2008 un proyecto de ley para enmendar y completar el Código Penal, cuyo artículo 399-17 reprime la financiación del terrorismo.

b) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 399-12 de la misma ley, se castigará con pena de prisión de 15 a 30 años a todo el que por cualesquiera medios, directa o indirectamente, ilícita e intencionalmente, proporcione o recaude fondos con la intención de que dichos fondos se utilicen, o con conocimiento de que dichos fondos se utilizarán, en su totalidad o en parte, para perpetrar actos de terrorismo.

c) En el mismo artículo ya mencionado se dispone la confiscación de los fondos así recaudados; por otra parte, en el artículo 399-26 se dispone la congelación de los activos y fondos.

Párrafo 2

a) y b) El Níger ratificó el Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, que prohíbe a los Estados firmantes el suministro de todo tipo de apoyo a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo.

c) En el artículo 3 de la Ley 97-016 relativa al estatuto de los refugiados, de 20 de junio de 1997, se prohíbe la concesión de dicho estatuto a toda persona que

haya cometido un delito grave contra la paz o cualquier delito grave de carácter no político fuera del país de acogida antes de ser admitida como refugiada o se haya declarado culpable de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

d) y e) Los actos de terrorismo y su financiación se castigan con arreglo al proyecto de ley.

f) Además de los artículos 12, 13, 14 y 15 del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, que tratan de la asistencia judicial mutua, el Níger ha firmado convenios bilaterales y multilaterales al respecto (véase la siguiente lista).

Lista de los convenios y acuerdos de cooperación judicial

1. Convenio de cooperación judicial entre la República del Níger y la República Argelina Democrática y Popular (Niamey, 12 de abril de 1984).
2. Convenio de cooperación en materia judicial entre la República del Níger y la República Francesa (Niamey, 19 de febrero de 1977).
3. Convenio general de cooperación en materia de justicia entre el Níger y Malí (Niamey, 22 de abril de 1960).
4. Acuerdo de cooperación judicial entre el Gobierno de la República del Níger y el Gobierno Militar Federal de Nigeria, firmado en Maiduguri el 18 de julio de 1990.
5. Convenio relativo a la cooperación en materia judicial entre los Estados partes en el acuerdo de no agresión y asistencia en materia de defensa (ANAD), firmado en Nouakchott el 21 de abril de 1987.
6. Convenio de la CEDEAO/A/PI/8/94 relativo a la extradición, firmado el 6 de agosto de 1994 en Abuja.
7. Convenio de la CEDEAO/A/PI/7/92 sobre la asistencia judicial mutua en materia penal, aprobado en Dakar el 29 de julio de 1992.
8. Convenio de cooperación y asistencia mutua en materia de justicia entre los Estados miembros del Consejo de la Entente, firmado en Yamoussoukro el 20 de febrero de 1997.
9. Tratado de conciliación de arreglo jurídico y arbitraje entre el Níger y la Confederación Suiza, firmado el 2 de agosto de 1963.
10. Acuerdo de cooperación en materia policial penal entre los Estados miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO).
11. Acuerdo de cooperación judicial entre el Ministerio Fiscal Popular Supremo de la República Popular China y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República del Níger, firmado el 30 de agosto de 2001.
12. Convenio en materia de seguridad entre los Estados miembros de la Comunidad de los Estados Sahelosaharianos (CENSAD), aprobado el 15 de mayo de 2004 en Bamako y ratificado mediante la Ley 2007-17 de 21 de junio de 2007.

Lista de los convenios bilaterales y multilaterales de referencia

- Proyecto de convenio entre la República del Níger y el Reino de Marruecos sobre asistencia judicial recíproca en materia civil y comercial;
- Proyecto de convenio contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas entre los miembros de la Comunidad de los Estados Sahelosaharianos (CEN-SAD);
- Proyecto de convenio sobre la asistencia judicial recíproca entre los países miembros de la Comunidad de los Estados Sahelosaharianos (CEN-SAD);
- Convenio sobre la asistencia judicial recíproca en materia penal y de extradición entre la Jamahiriya Árabe Libia y la República del Níger.

g) El párrafo 25 del artículo 399 del Código Penal establece que se podrán hacer pesquisas en todo momento y todo lugar para detectar delitos relacionados con el terrorismo.

Párrafo 3

a) El intercambio de información tiene lugar por conducto de Interpol, de la cual el Níger es miembro.

b) El intercambio de datos tiene lugar por conducto de Interpol y de los mecanismos previstos en los convenios de asistencia recíproca judicial, multilateral y bilateral.

c) Como ya se ha señalado, el Níger ha firmado varios acuerdos de cooperación y asistencia judicial recíproca.

d) Como se ha señalado en el párrafo 1, a-2, b y f, el Níger es parte en el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, ratificado el 17 de noviembre de 2003.

e) Además de las convenciones y los convenios internacionales, los acuerdos de cooperación y asistencia judicial recíproca y los protocolos internacionales relativos al terrorismo, ya vigentes y ratificados por el Níger, están en vías de concertarse o ratificarse otros acuerdos, convenios y convenciones (véase el párrafo 2 f).

f) La Ley 97-016, de 20 de junio de 1997, relativa al estatuto de los refugiados, no confiere este estatuto a quien haya cometido uno de los delitos siguientes:

- 1) Crímenes contra la paz, de guerra o de lesa humanidad según los instrumentos internacionales relativos a estos crímenes;
- 2) Actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Igualmente, esta ley deja sin efecto el estatuto de refugiado de quien:
 - Haya cometido un delito grave de carácter no político en el país de acogida después de haber sido admitido en él como refugiado;
 - Haya sido declarado culpable de un atentado contra el orden público en el país de acogida.

g) Los convenios convenciones internacionales para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas y para la represión de la financiación del terrorismo, ratificados por el Níger el 17 de noviembre de 2003, prohíben a los Estados miembros tener en cuenta los motivos políticos como justificación del rechazo de la solicitud de extradición de presuntos terroristas.

Lucha contra el blanqueo de capitales

Existe actualmente en el Níger una completa legislación al respecto.

En efecto, de conformidad con la directiva comunitaria No. 07-2002/CM/UEMAO de 19 de septiembre de 2002, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales en los Estados miembros de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMAO), particularmente sus artículos 36, 37, 39, 40, 41, 42 y 43, el Níger aprobó el 8 de junio de 2004 la Ley No. 2004-41, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales.

Esta ley, en razón de su objeto y ámbito de aplicación, constituye sin duda alguna un eficaz instrumento de prevención y represión de las distintas formas de blanqueo de capitales.

En cuanto a su objeto, la ley define el marco jurídico relativo a la lucha contra el blanqueo de capitales a fin de impedir la utilización de los circuitos económicos o bancarios de la Unión para el reciclaje de capitales o para cualquier otro fin ilícito.

En cuanto a su ámbito de aplicación, la nueva ley se aplica a las personas naturales y/o jurídicas de derecho público o privado (Banco Central, agencias de viajes, organizaciones no gubernamentales y Tesorería del Estado, con inclusión de quienes ejerzan profesiones jurídicas independientes y representen o asesoren a clientes en cualquier procedimiento judicial) que, en el ejercicio de su profesión, lleven a cabo o controlen operaciones de depósitos, canje, colocación, cambio o cualquier otro movimiento de capitales u otros bienes.

La nueva ley impone a las personas mencionadas la obligación especial de identificar a sus clientes ante los organismos financieros y las obligaciones de supervisar ciertas operaciones y conservar y transmitir documentos. Tienen además la obligación de formular, en su caso, una declaración de operación sospecha.

Con arreglo al artículo 16 de la ley, se aprobó el decreto No. 2004-262/PRN/ME/F de 14 de septiembre de 2004, relativo a la creación, la organización y el funcionamiento del Centro Nacional de tratamiento de la información financiera (CENTIF).

En el artículo 17 de la ley se define este Centro como un “servicio administrativo dotado de autonomía financiera y facultades de decisión autónomas en las materias de su competencia”.

El Centro está encargado en particular de recibir, analizar y procesar datos que sirvan para establecer el origen o la índole de las transacciones que sean objeto de declaraciones de operación sospechosa que deben expedir las personas (jurídicas o naturales) enumeradas a esos efectos en la ley.

Esas personas o entidades, (bancos, establecimientos financieros, organizaciones no gubernamentales, cajas de ahorro y préstamo, servicios financieros, correos, compañías de seguros) tienen la obligación, previa solicitud del

Centro de comunicar todos los datos que permitan verificar el carácter ilícito de movimientos de capital.

El Gobernador de la BCEAO, mediante instrucción No. 01/2007/RB, de 2 de julio de 2007, enuncia las modalidades de aplicación de esta ley uniforme.

Esta instrucción impone a los bancos, obligaciones generales de vigilancia y obligaciones específicas de vigilancia más estricta.

Otros proyectos de ley relativos a la financiación del terrorismo

- Ley marco sobre la lucha contra la financiación del terrorismo en los Estados miembros de la CEDEAO, aprobada por los Estados miembros en junio de 2007 en Banjul (Gambia);
- Directiva No. 04-2007/CM/UEMOA, de 4 de julio de 2007, relativa a la lucha contra la financiación del terrorismo en los Estados miembros de la UEMAO, publicada por la Comisión de la Unión a fin de que cada país promulgue una ley separada sobre la financiación del terrorismo.

Con arreglo al artículo 27, relativo a la obligación de incorporación en la legislación interna, los Estados miembros deben aprobar, a más tardar dentro de los seis meses siguientes a la firma de la directiva, textos uniformes relativos a la lucha contra la financiación del terrorismo.

Congelación de fondos, activos y otros recursos financieros, de conformidad con el párrafo 1 c) de la resolución 1373, de 28 de septiembre de 2001

Además de las disposiciones sobre congelación ya vigentes, el párrafo 2 del artículo 28 de la ley 2004-41, de 8 de junio de 2004, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, dispone que “el CENTIF, a título excepcional y sobre la base de informaciones graves, concordantes y verosímiles que obren en su poder, podrá objetar la ejecución de [la mencionada operación] antes de que venza el plazo para su ejecución fijado por el declarante. La objeción será notificada a éste por escrito y la operación no podrá ejecutarse durante un período que no podrá exceder de 48 horas”.

El artículo 399-26 del proyecto de ley mencionado prescribe la congelación de los activos, fondos, valores o bienes desde el momento en que se inicie el procedimiento.

La ley marco relativa a la lucha contra la financiación del terrorismo, que será incorporada en el ordenamiento jurídico interno de los Estados cuando sea firmada por los Jefes de Estado y de Gobierno, dedica un capítulo entero a la congelación de fondos.

Con arreglo al artículo 10-1 del proyecto de ley, la autoridad competente dictaminará mediante decisión administrativa la congelación de fondos u otros bienes de quienes cometan o intenten cometer actos de terrorismo, participar en ellos o facilitar su comisión, así como de las entidades que pertenezcan a esas personas o estén controladas directamente por ellas y de las personas o entidades que actúen por cuenta o siguiendo instrucciones de esas personas o entidades, con inclusión de los fondos u otros bienes que sean generados por bienes que estén en

posesión o bajo el control directo o indirecto de esas personas o de las personas o entidades asociadas o provengan de esos bienes.

Según el párrafo 2, la congelación tiene lugar sin dilación y sin notificación previa a los interesados.

El párrafo 3 se refiere a la congelación por decisión administrativa de la autoridad competente de fondos u otros bienes de las personas designadas por el Comité establecido en la resolución 1269, relativa a Al-Qaida y los talibanes (Asamblea General de las Naciones Unidas, de conformidad con la resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad).

Las demás disposiciones se refieren a la impugnación, a medidas administrativas y a las sanciones en caso de incumplimiento.

La decisión por la cual se revisan los estatutos del Grupo intergubernamental de lucha contra el blanqueo de dinero, adoptada en Niamey en la 29ª reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada el 12 de enero de 2006, amplía las atribuciones de este Grupo a la lucha contra la financiación del terrorismo. Asimismo, en noviembre de 2006 se celebraron en Niamey negociaciones con miras a enmendar el texto de la ley marco. El Níger adoptará las medidas necesarias para incorporar las disposiciones en su ordenamiento jurídico interno.

Por último, el artículo 21 de la directiva No. 04-2007/CM/UEMOA, relativa a la lucha contra la financiación del terrorismo en los Estados miembros de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias en relación con la congelación de fondos y otros recursos financieros de los terroristas, así como de quienes financien el terrorismo y las organizaciones terroristas.

Dispone además que los Estados miembros deben adoptar legislación relativa a la congelación de fondos, en particular el reglamento No. 14-2002/CM/UEMOA, de 19 de septiembre de 2002, que se refiere a la congelación de fondos y otros recursos financieros en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo en el contexto de la UEMAO, y deben adoptar también decisiones relativas a la lista de personas afectadas por la congelación de fondos.

Por otra parte, el Níger se propone adoptar medidas para prohibir que se pongan fondos, activos financieros o recursos económicos a disposición de las personas mencionadas en el apartado d) del párrafo.

Armas (párrafo 2 a) de la resolución)

El marco jurídico de la lucha contra el tráfico de armas en el Níger está constituido por la Convención de la CEDEAO sobre armas ligeras y de pequeño calibre, municiones y material conexo, el Código Penal del Níger (ley No. 2003-25 de 13 de junio de 2003), el decreto No. 63-074/MJ, de 23 de abril de 1963, y el decreto 84-185/PRN, complementado por el decreto 99-417/CAB/PRN, de 20 de diciembre de 1999.

El Níger es el único país que ha ratificado hasta la fecha la mencionada convención de la CEDEAO, que hace más estrictas las disposiciones sobre transferencia de armas (cap. 3) transparencia e intercambio de información entre los Estados (cap. 4) y los mecanismos operativos, en particular para el control y la posesión de esas armas, su certificación, marcas, recogida y destrucción (cap. 5).

También se prevé que los países miembros de la CEDEAO armonicen sus disposiciones legislativas relativas a las armas.

En el plano legislativo, los artículos 299 y 300 del Código Penal se refieren a la cuestión de las armas.

Así, según el artículo 299, se prohíbe en todo el territorio de la República la importación, la venta, el transporte, la posesión y el porte de armas de fuego o de aire comprimido, balas, cartuchos y pólvora, así como de cualquier tipo de explosivo.

Quien importe, venda, ceda, transporte, tenga en su poder o porte en el territorio de la República armas, explosivos o municiones será sancionado con una pena de reclusión de 2 a 10 años y una multa de 20.000 a 200.000 francos.

En la misma disposición se establece la confiscación de las armas, explosivos y municiones objeto de la infracción. La tentativa está sancionada con la misma pena que la comisión del delito.

El artículo 300 sanciona la fabricación, sin la autorización de la autoridad pública, de explosivos, armas de fuego perfeccionadas y fusiles de chispa o pistón, así como las piezas de esas armas y municiones. Se aplican las penas previstas en el artículo precedente y se decreta la confiscación de los explosivos, armas, piezas y municiones objeto del delito.

La combinación de estas disposiciones permite reprimir con eficacia la posesión y el uso ilícito de armas.

En el plano institucional y reglamentario, por decreto No. 99/417/CAB/PRN, de 20 de diciembre de 1999, se estableció una comisión nacional encargada de la recogida y el control de armas ilícitas. Se ha establecido y llevado a la práctica en el departamento de N'guigmi un proyecto piloto de recogida de armas ilícitas y apoyo al desarrollo sostenible.

Además del artículo 642, el párrafo 1 de la misma disposición y los artículos, 643 y 647 del Código de Procedimiento Penal, que establecen el principio de "extraditar o procesar", el artículo 46 de la ley 2004-41, de 8 de junio de 2004, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, dispone que "las jurisdicciones nacionales son competentes para conocer de los delitos previstos en la presente ley que haya cometido cualquier persona natural o jurídica, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar en que esté establecida su sede, e incluso fuera del territorio nacional, si el delito se ha cometido en uno de los Estados miembros de la UEMAO".

Las instancias nacionales pueden conocer también de los mismos delitos cometidos en un Estado cuando un acuerdo internacional les dé competencia para ello.

El artículo 116 de la ordenanza 99-42, de 23 de septiembre de 1999, relativa a la lucha contra la droga en el Níger, dispone también que los tribunales del país son competentes cuando:

- El delito se comete en su territorio o uno de sus dos elementos constitutivos tiene lugar en su territorio;

- El delito es cometido por uno de sus nacionales o una persona que resida habitualmente en su territorio;
- El autor se encuentre en su territorio y no haya sido extraditado;
- Por último, el delito se ha cometido a bordo de un buque cuyo Estado del pabellón haya autorizado a detener, visitar y confiscar en caso de que se descubran pruebas de que participa en un tráfico ilícito y haya autorizado a tomar las medidas que proceda respecto del buque, quienes se encuentren a bordo y su carga.

La ley marco relativa a la lucha contra la financiación del terrorismo en los Estados miembros de la CEDEAO, establece la misma competencia para los tribunales nacionales (título V, art. 13).

En cuanto a las disposiciones que apuntan a regular las redes bancarias informales, la misma ley dedica un capítulo íntegro a los intermediarios de fondos (art. 54 y párrs. 1, 2 y 3).

En particular, el transporte físico transfronterizo de especies e instrumentos negociables o al portador, tanto en la entrada como en la salida de las fronteras, deben estar sometidos a medidas efectivas de vigilancia y control tomadas por el Estado para que no sean utilizados en la financiación del terrorismo.

Igualmente, el artículo 17 de la directiva No. 04-2007/CM/UEMAO, relativa a la lucha contra la financiación del terrorismo en los Estados miembros de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, dispone que los Estados miembros se comprometerán a tomar medidas para detectar el transporte transfronterizo de especies e instrumentos al portador, especialmente mediante un sistema de declaración o cualquier otro sistema por el que se establezca la obligación de comunicar los datos relativos a esas especies e instrumentos.

Los Estados miembros deben asegurarse de que se impongan a quienes hayan hecho declaraciones o comunicaciones falsas sanciones que sean eficaces, proporcionadas al delito y disuasivas.

B. La droga

Además de la información contenida en nuestro último informe, la ordenanza 99-42 de 23 de septiembre de 1999, titulada Código de la droga, establece disposiciones pertinentes que merecen notarse en el presente informe. La ordenanza se caracteriza por su mayor severidad, resultante de las disposiciones del artículo 102, que castiga con prisión perpetua la incitación al uso ilícito y a la comisión de los delitos previstos en los artículos 94 a 101, incluso si la incitación no ha tenido efecto.

La ordenanza integra también todas las preocupaciones internacionales, en particular los aspectos relativos al blanqueo de dinero, al rastreo del blanqueo y a la entrega vigilada. También establece disposiciones relativas a la vigilancia y a las escuchas telefónicas, al acceso a los sistemas informáticos, a la vigilancia de cuentas bancarias y a la producción de documentos bancarios, financieros y comerciales.

Así pues, conforme a lo dispuesto en el artículo 101, serán castigados con prisión de 10 a 20 años y con una multa de F50 millones o con una sola de esas dos penas:

- Los que hayan colaborado en la conversión o la transferencia de recursos o de bienes procedentes de las infracciones previstas en los artículos 94 a 100 con el fin de disimular o encubrir el origen ilícito de dichos bienes o recursos, o de ayudar a una persona implicada en la comisión de una de esas infracciones a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;
- Los que hayan colaborado en la simulación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, el lugar o la disposición procedente del movimiento o de la propiedad real de los recursos, bienes o derechos de las infracciones enumeradas.

En relación con la competencia de las jurisdicciones nigerinas, el artículo 116 dispone que los tribunales del Níger son competentes para entender en las infracciones previstas en la sección V del presente capítulo cuando:

- La infracción se haya cometido en su territorio o cuando uno de los actos que constituyen los elementos de la infracción se haya cometido en territorio nigerino;
- La infracción haya sido cometida por un nacional del Níger o por una persona residente habitualmente en el Níger;
- El autor esté en el territorio nigerino y no haya sido objeto de extradición;
- La infracción se haya cometido a bordo de un barco que el Estado del pabellón ha autorizado a inspeccionar, a visitar y a tomar, en caso de descubrimiento de pruebas de participación en un tráfico ilícito, las medidas adecuadas con respecto al barco, a las personas a bordo y a la carga.

Disposiciones destinadas a facilitar las investigaciones (arts. 118 y 119)

Artículo 118: trata de la vigilancia que se aparta de las reglas del derecho común.

El artículo 119 trata de las investigaciones, que son posibles a cualquier hora del día y de la noche cuando se hacen en los locales en que se fabrican, se transforman o se depositan ilícitamente drogas de alto riesgo, drogas de riesgo o precursoras y materiales destinados al cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de dichas drogas, o en los locales en que se usan en compañía drogas de alto riesgo.

El control en los servicios postales con miras a descubrir las remesas ilícitas de drogas está autorizado a las personas habilitadas para comprobar o reprimir las infracciones (artículo 120). Los artículos 122 y 123 de la citada ordenanza tratan de las entregas vigiladas.

Las personas sospechosas de participación en los delitos previstos en la ordenanza pueden ser puestas bajo vigilancia o escucha telefónica por los funcionarios competentes para comprobar las infracciones (artículo 125).

Por último, los artículos 126, 127, 128 y 129 prescriben respectivamente el acceso a los sistemas informáticos, la puesta bajo vigilancia de las cuentas

bancarias, la producción de documentos bancarios, financieros y comerciales y las medidas destinadas a facilitar el descubrimiento del blanqueo de dinero.

C. En materia de trata de personas y en particular de trata de mujeres y de niños

El Níger, tras haber ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y su Protocolo adicional para prevenir, reprimir y castigar la trata de personas y en particular la de mujeres y niños, elaboró un proyecto de ley destinado a integrar los dos instrumentos mencionados en el ordenamiento jurídico nacional, que tiene por objeto:

- Prevenir y combatir la trata de personas, en particular de mujeres y niños;
- Proteger, sostener y ayudar a las víctimas de dicha trata haciendo respetar sus derechos fundamentales;
- Castigar a los traficantes por toda infracción relativa a la trata;
- Facilitar la cooperación entre los Estados partes en la Convención.

Este proyecto de ley se ha transmitido a la Secretaría General del Gobierno para que lo adopte el Consejo de Ministros.

Por otra parte, se ha previsto la creación de una comisión nacional contra la trata de personas y un organismo nacional de lucha contra la trata de personas encargados de adoptar, cada uno en su esfera de actividad, políticas y programas relativos a la prevención de la trata de personas y de asegurar su aplicación.

D. Sobre el derecho de asilo

El derecho de asilo se rige en el Níger por la ley No. 97-016 de 20 de junio de 1997 y el decreto No. 98-382/PRN/MI/A de 24 de diciembre de 1998, titulado Modalidades de aplicación de la ley 97-016 de 20 de junio de 1997.

La ley tiene por objeto controlar y prevenir las entradas no autorizadas.

Así pues, según lo dispuesto en el artículo 3 de la ley, no se considera refugiado a la persona que entra en una de las siguientes razones de exclusión:

1. Haber cometido un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad en el sentido de los instrumentos internacionales elaborados para establecer disposiciones relativas a dichos crímenes;
2. Haber cometido un delito grave de carácter no político fuera del país de acogida antes de ser admitido como refugiado;
3. Ser culpable de actos contrarios a los objetivos y principios de la Organización de la Unidad Africana;
4. Ser culpable de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Además, existe una comisión encargada de admitir, anular o retirar el beneficio del estatuto de refugiado llamada la Comisión Nacional de Elegibilidad para el

Estatuto del Refugiado, en la cual participa como observador el representante del Comisionado de las Naciones Unidas.

Las decisiones de la Comisión son susceptibles de recurso ante el Ministro del Interior, sin perjuicio de otras vías de recurso ante las jurisdicciones competentes.

En vista de la existencia de esa disposición, se puede afirmar que el apartado f) del párrafo 3 de la resolución 1373 se tiene en cuenta en la ley nigerina. Lo mismo vale para la resolución 1269 (1999).

En efecto, antes de conceder el estatuto de refugiado a un solicitante de asilo, la ley nigerina exige que se hagan verificaciones para determinar si el solicitante entra en alguno de los casos previstos en el artículo 3 citado. Incluso cuando ha sido concedido, el beneficio del estatuto del refugiado previsto por dicha ley deja de valer para la persona beneficiaria si ésta ha cometido un delito grave de carácter no político fuera del país de acogida (quinto apartado del artículo 4) o si es declarada culpable de atentado al orden público y a la seguridad nacional (artículo 4, apartado 8) o si desarrolla actividades subversivas dirigidas contra otro Estado miembro (artículo 4, apartado 9).

Los solicitantes y los beneficiarios también pueden ser expulsados, rechazados o extraditados del territorio nigerino por razones de seguridad nacional o de orden público.

No obstante, la decisión de expulsión sólo puede tomarse después de recibir la opinión de la Comisión Nacional de Elegibilidad para el Estatuto, salvo en dos casos:

- Razón de seguridad nacional;
- Razón de orden público.

E. Sobre la extradición

En general, la extradición se rige por los tratados bilaterales o multilaterales en que es parte el Níger.

No obstante, en el plano interno, existen leyes que tratan la cuestión:

- La ley 61-33 de 14/08/1961, titulada Institución del código de procedimiento penal y modificada por las leyes 2003-026 de 13 de junio de 2003 y 2004-21 de 16 de mayo de 2004, establece el principio de extradición en el artículo 647.

El artículo dice que “todo extranjero que, fuera del territorio de la República, sea culpable, sea como autor o como cómplice, de un crimen o un delito tentatorio a la sociedad del Estado o de falsificación del sello del Estado y de moneda nacional de curso legal puede ser procesado y juzgado conforme a las disposiciones de las leyes del Níger si es detenido en el Níger o si el Gobierno obtiene su extradición”.

Nótese sin embargo que dicho código no precisa el procedimiento que debe seguirse ni las condiciones en que puede denegarse la extradición.

- La ley 2004-41 de 8 de junio de 2004, titulada Lucha contra el blanqueo de capitales. Esta ley dedica siete artículos a la extradición, a saber:

- El artículo 71, relativo a las condiciones de la extradición;
- El artículo 72, que trata del procedimiento simplificado;
- El artículo 73, relativo a la información complementaria;
- El artículo 74, relativo a la detención provisional;
- El artículo 75, que trata de la entrega de objetos;
- Por último, el artículo 116, apartado 1, inciso 3, sacado de la ordenanza 99-42 de 23 de septiembre de 1999, relativa a la lucha contra la droga en el Níger, también trata de la extradición.

Además, en el proyecto de ley marco sobre la lucha contra la financiación del terrorismo en los países miembros de la CEDEAO, la extradición se ha tratado en general de conformidad con las preocupaciones internacionales.

Por ejemplo, se tratan en él las solicitudes de extradición, las medidas de seguridad, la doble incriminación, los motivos obligatorios de denegación, los motivos facultativos de denegación, la transmisión de las solicitudes, el contenido de las solicitudes, el tratamiento de las solicitudes, la información complementaria, la solicitud de confidencialidad, la denegación de ejecución, el procedimiento de extradición simplificado, el no empleo de los elementos de prueba para otros fines y la imputación de costas.

Sin embargo, no se prevé un plazo legal para responder a una petición de asistencia judicial o de extradición.

No obstante, de la Convención sobre ayuda mutua judicial de la CEDEAO resulta que:

- Incumbe al Estado miembro requirente precisar el plazo en que desea que se ejecute la solicitud (artículo 5, 1, f);
- El Estado miembro requerido está obligado a ejecutar la solicitud de asistencia mutua con diligencia (artículo 6, 1);
- A petición del Estado requirente, el Estado requerido puede informar al requirente de la fecha y el lugar de la ejecución de la solicitud para que eventualmente esté presente (artículo 6, 2);
- Cuando un Estado miembro requiere la comparecencia de una persona, la solicitud debe llegar al Estado requerido por lo menos 60 días antes de la comparecencia.

Por otra parte, en materia de detención provisional, si el Estado requerido no recibe, en un plazo de 20 días después de la operación, la solicitud de extradición y las piezas mencionadas en el artículo 18, la detención debe levantarse.

F. La legislación sobre la entrada y la permanencia de extranjeros

La entrada y la permanencia en el Níger están reglamentadas por la ordenanza 81-40 de 29 de octubre de 1981, relativa a la entrada y la permanencia de los extranjeros en el Níger, y el decreto No. 87-076/PCMS/MI/MAE/C de 18 de junio de 1987, que reglamenta las condiciones de la entrada y la permanencia de los extranjeros en el Níger.

Estos dos textos rigen para los extranjeros y fijan las condiciones de su permanencia y entrada, las condiciones de su rechazo y expulsión y las sanciones que pueden imponérseles en caso de violación.

G. Sobre las asociaciones de beneficencia

El marco legislativo está formado por:

- La ordenanza 84-06 de 1° de marzo de 1984, titulada Régimen de las asociaciones y modificada sucesivamente por la ordenanza 84-50 de 5 de noviembre de 1984 y la ley 91-006 de 20 de mayor de 1991;
- El decreto 92-252/PM/MF/P de 25 de septiembre de 1992, titulado Modalidades de aplicación de la ordenanza 84-06 de 1° de marzo de 1984;
- La nota circular de 24 de noviembre de 1995 relativa al protocolo de acuerdo tipo entre una organización no gubernamental y el Gobierno de la República del Níger.

Estos textos aprobados en el año 1984 no habían incorporado el aspecto de la financiación del terrorismo.

Acaba de elaborarse un proyecto de ley titulado Régimen de las asociaciones y de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

Este proyecto de texto se ajusta en parte a las obligaciones que impone la resolución 1373.

En efecto, para impedir que los fondos recibidos por las organizaciones de beneficencia no se desvíen a otros fines, en particular a los actos relacionados con la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas, se han incorporado las siguientes medidas.

Se trata esencialmente de las obligaciones que se imponen a dichas organizaciones:

- La obligación de dichas organizaciones de declarar sus fuentes de financiación exteriores a la autoridad administrativa y también las operaciones cubiertas por dicha financiación en un plazo de 30 días (art. 14);
- La declaración de las solicitudes de financiación;
- Las copias del acuerdo de financiación deben remitirse a la autoridad administrativa de la sede;
- El control por el Estado del uso de dichos fondos cuando sea necesario (artículo 14);
- Comunicar a la autoridad administrativa que ha recibido la declaración de fundación, todos los cambios que ocurran en su administración o dirección y también todas las modificaciones que se introduzcan en sus estatutos (artículo 8);
- La consignación en un registro especial llevado en la sede de la asociación de las modificaciones y cambios introducidos, que se presentará a las autoridades administrativas o judiciales cuando éstas lo soliciten.

Sin embargo, debe notarse que este proyecto de texto adolece de algunas deficiencias.

En efecto, no se han incorporado en él cuestiones relativas al procedimiento de inscripción, a las declaraciones obligatorias, a las donaciones, a la contabilidad y a las cuentas bancarias.

No obstante, estas cuestiones se incluirán en el marco de la incorporación del proyecto de ley marco de la CEDEAO relativo a la lucha contra la financiación del terrorismo en los Estados miembros.

H. Lucha contra la inmigración clandestina

El Níger, país saheliano-sahariano situado en el centro del continente y con una frontera de más de 5.000 kilómetros con 1.267.000 kilómetros cuadrados de superficie y 5.500 kilómetros de perímetro, está expuesto a corrientes migratorias considerables.

A causa de la proximidad de sus fronteras y la insuficiencia de sus medios de intervención, el Níger es un lugar en que convergen traficantes de drogas, bandidos armados e inmigrantes clandestinos a menudo procedentes de los países de África e incluso de Asia y del Oriente Medio.

Para combatir este azote y vigilar mejor sus fronteras, el Níger participa en el proyecto “Across Sahara” financiado por la Unión Europea (UE), cuyo objeto específico es contribuir a la elaboración de una política y de prácticas adecuadas tendientes a prevenir y a combatir la migración ilegal, la trata de personas y el contrabando.

En el marco de dicho proyecto varios agentes de policía han recibido formación en gestión de fronteras, migraciones, puntos de contacto y patrullas.

Existe un acuerdo parecido de lucha contra la delincuencia y la inmigración clandestina entre el Níger y Nigeria.

La Dirección de la Policía Nacional prevé un proyecto de creación de una dependencia contra el terrorismo. Con miras a ejecutar este proyecto, ya han obtenido formación en los Estados Unidos y en Egipto agentes de policía y agentes de las Fuerzas Nacionales de Intervención y de Seguridad (FNIS).

I. Los diferentes tipos de documentos de viaje que se expiden en el Níger

En el Níger se expiden tres principales documentos de viaje: el pasaporte, la libreta de viaje CEDEAO y la tarjeta de identidad nacional.

En el marco de la CEDEAO se ha establecido un pasaporte llamado “pasaporte CEDEAO”, que es un documento con elementos de seguridad, legible por máquina y uniforme.

Existen tres tipos de pasaporte: el pasaporte ordinario, el pasaporte de servicio y el pasaporte diplomático.

La libreta de viaje es expedida por la comisaría de residencia del solicitante, vale sólo dos años y puede prorrogarse una sola vez. Sólo se admite en los países miembros de la CEDEAO y no tiene elementos de seguridad.

La tarjeta nacional de identidad, que es obligatoria desde 1964, se expide a todo nigerino que la solicita; no tiene elementos de seguridad.

Hay disposiciones penales que reprimen la imitación, el uso y la falsificación de estos documentos de viaje (artículo 152 y siguientes del Código Penal).

El marco institucional

Para asegurar mejor la eficacia en la aplicación de las convenciones y las disposiciones de su legislación, el Níger tiene instituciones encargadas del seguimiento de esas convenciones, a saber:

- El Comité Nacional contra el Terrorismo, creado en aplicación de la resolución 1373 (2001) de 28/09/2001 aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conforme al capítulo 7 de la Carta, y sobre el cual hemos informado ampliamente en nuestro informe anterior (véase el informe de 2004);
- La Dependencia Nacional de Tratamiento de la Información Financiera (CENTIF), establecida por el decreto N° 2004-262/PRN/ME/F de 14/09/2004, en aplicación del artículo 16 de la ley 2004-41 de 8/06/2004 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales (véase *supra*);
- La Comisión Nacional de Elaboración de Estrategias de Lucha contra la Corrupción creada por el decreto 2005-106/PRN/PM de 22/04/2005, que modifica y completa el decreto No. 2003-256/PRN de 17/10/2003. Esta Comisión tiene una composición multidisciplinaria (institución del Estado y de la sociedad civil) y tiene las atribuciones de estudiar el fenómeno de la corrupción en el Níger, definir estrategias de lucha, elaborar un programa de acción y hacer sugerencias o recomendaciones al Gobierno en la esfera de la lucha contra la corrupción.

La estrategia nacional de lucha contra la pobreza

El Gobierno de la República del Níger, consciente de que la lucha contra la corrupción, el terrorismo y las demás formas de delincuencia organizada, tanto nacionales como transnacionales, está relacionada con el nivel de desarrollo, y en vista de la pobreza de la gran mayoría de la población, ha elaborado un programa marco de lucha contra la pobreza (SRP) que está bajo la autoridad del Primer Ministro:

- El Programa Especial del Presidente de la República para las capas menos favorecidas está destinado a construir pequeñas casas, aulas y casillas de salud a fin de elevar la tasa de escolarización, en particular la de las niñas, y la tasa de cobertura sanitaria o el sector de las vacas lecheras o del crédito femenino.

IV. Dificultades encontradas

El Níger es un vasto territorio que comparte fronteras con siete países. Tiene más de 55.000 kilómetros de fronteras, de los cuales 1.500 kilómetros en Nigeria, y dispone de recursos limitados.

Periódicamente el país afronta situaciones de crisis alimentaria grave. Es innegable que sus escasos recursos sólo pueden dedicarse con prioridad a las cuestiones de supervivencia, lo cual dificulta los esfuerzos de lucha contra el terrorismo.

Además de la falta de un marco adecuado, dificultan la lucha:

- La insuficiencia del equipo: se ha comprobado a menudo que las fuerzas de defensa y de seguridad están menos equipadas que los grupos terroristas, en particular en armamento y material de comunicaciones;
- La insuficiencia de los efectivos, en cantidad y en calidad;
- La falta de medios para el Comité Nacional contra el Terrorismo;
- La falta de un cuerpo de magistrados (procuradores y jueces) especializados en la lucha antiterrorista y la insuficiencia de la formación especializada para los agentes encargados de la aplicación de la ley (policía, gendarmería, aduanas, Fuerzas Nacionales de Intervención y de Seguridad (FNIS));
- La inexistencia de ciertos servicios esenciales, como los de remoción de minas, y la no participación de la población en los esfuerzos de lucha contra el terrorismo;
- La escasa motivación de los agentes de defensa y de seguridad (ingresos bajos);
- La inestabilidad administrativa del personal formado para la lucha contra el terrorismo;

Los factores enumerados no favorecen una lucha eficaz contra el terrorismo, que requiere además medios adecuados.

En efecto, la complejidad de la infracción exige que los encargados de aplicar la ley tengan una formación específica. Por tanto es necesario fortalecer la capacidad de todos los actores (magistrados, fuerzas del orden, Comité Nacional de Lucha contra el Terrorismo, militares, aduanas, etc.).

a) Fortalecimiento de la capacidad de los actores

- Reclutamiento anual de agentes en los cuerpos encargados del control de fronteras, defensa, seguridad, investigaciones y represión;
- Formación de los actores en el Níger y en el extranjero (véase la iniciativa PAN-SAHEL).

b) Fortalecimiento de la capacidad operacional

Provisión de medios logísticos importantes y de medios de comunicación adecuados, etc. para las Fuerzas de Defensa y Seguridad, el Ejército y la Aduana.

Niamey, 4 de febrero de 2008